



**GUADALAJARA, JALISCO, 31 TREINTA Y UNO DE MAYO DEL  
AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS.**

**V I S T O** para resolver en sentencia definitiva el Juicio Administrativo radicado con número de expediente anotado rubro, promovido por [REDACTED] en contra de la **DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.**

### **R E S U L T A N D O**

1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal el día 27 veintisiete de septiembre del año 2022 dos mil veintidós, [REDACTED], por su propio derecho, promovió juicio administrativo, atento a los motivos y consideraciones legales que del mismo se desprenden.

2.- En proveído de fecha 27 veintisiete de octubre del año 2022 dos mil veintidós, se admitió la demanda de referencia, teniéndose como Autoridad demandada a la ya citada, y como actos administrativos impugnados, los señalados en el escrito inicial de demanda. De igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas que se encontraron ajustadas a derecho, teniéndose por desahogadas aquellas que su naturaleza lo permitió, requiriendo a la demandada por los actos reclamados. De lo anterior, se ordenó correr traslado a la autoridad con las copias simples de la demanda inicial y documentos anexos, apercibida que de no producir contestación en un término de 10 diez días se tendrían por ciertos los hechos que no fueran contestados, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, resulten desvirtuados.

3.- Por acuerdo de fecha 27 veintisiete de enero del año 2023 dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad produciendo contestación a la demanda, oponiendo excepciones y defensas; de igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas, desahogándose aquellas que su naturaleza lo permitió. De lo anterior, se ordenó dar vista al actor.

4.- Con fecha 16 dieciséis de febrero del año 2023 dos mil veintitrés, se regularizó el procedimiento a efecto de requerir al actor por la prueba señalada en su escrito inicial, consistente en la tarjeta de circulación del vehículo materia del juicio, sin que cumplimentara dicho requerimiento, por lo que, el día 26 veintiséis de mayo siguiente, se hizo efectivo el apercibimiento de tener por no ofertado dicho medio de convicción. Asimismo, al no quedar pruebas pendientes por desahogar, se ordenó poner los autos a la vista de las partes para que dentro del término de 3 tres días formularan por escrito sus alegatos, surtiendo efectos de citación para el dictado de la sentencia definitiva correspondiente.

### **C O N S I D E R A N D O**



**I.-** Esta Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, resulta competente para conocer y resolver la presente controversia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los numerales 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Entidad, y los arábigos 1º, 4, 72, 73 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Jalisco.

**II.-** La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentran acreditados con las constancias que obran a fojas 7 siete del Expediente en que se actúa, mismas que merecen valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido en los artículos 336, 337 y 403 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58 de este último ordenamiento legal.

**III.-** Previo a resolver el fondo del asunto que se plantea, se analizan en primer término las causales de improcedencia y sobreseimiento, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente en el Juicio Administrativo, al tenor de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 30 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como la Jurisprudencia II.1o. J/5, consultable en la página 95 noventa y cinco, Tomo VII, mayo del año 1991 mil novecientos noventa y uno, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que reza: “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia”.

Analizadas las constancias que integran el Expediente en que se actúa, se advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia respecto a la falta de interés jurídico de la demandante, toda vez que conforme a lo dispuesto en el numeral 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, únicamente pueden intervenir las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión, condición que no se acredita en el caso concreto, dando lugar a la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 29 de la Ley en comento, que a la letra señala:

**“Artículo 29.** *Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra los actos:*

**I.** *Que no afecten los intereses jurídicos del demandante o que se hayan consumado de un modo irreparable;*  
(...)”

Se afirma lo anterior, a virtud que el acto administrativo que se pretende reclamar, visible a fojas 7 siete del Sumario, corresponde al vehículo con número de placas [REDACTED], cuya propiedad o interés jurídico no queda justificado por la accionante, tomando en consideración que únicamente al propietario o el conductor del vehículo, siendo responsables solidarios, se les reconoce como titulares de un derecho subjetivo que, al ser violentado nace dicho interés jurídico



para acudir a juicio y peticionar su nulidad, lo anterior de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, a saber:

*“Artículo 174. Las infracciones en materia de movilidad y transporte, serán sancionadas administrativamente, se harán constar por medio de cédula de notificación de infracción por la Secretaría de Movilidad, por conducto de la policía vial, en los términos de esta ley y su reglamento, y se aplicarán al propietario o conductor del vehículo. Ambos responderán solidariamente del pago de la sanción.*

*(...)”*

En este sentido, la accionante acompaña a su demanda solamente la cédula de notificación de infracción impugnada, así como la Factura del vehículo precisado en ella en favor de la demandante, documentales que se valoran de conformidad a lo establecido en los artículos 329, fracción II, 336, 337, 399 y 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, sin que de dichos documentos o de algún otro que obra en el expediente en que se actúa, se desprenda fehacientemente que las placas cuya infracción impugna, correspondan al vehículo consignado en la Factura visible a fojas 6 seis del Sumario, con la que la parte actora pretende acreditar su interés jurídico, o la vinculación que existe entre dicho vehículo con las placas vehiculares que sostienen el adeudo, materia del presente juicio, en razón que dicha factura contiene únicamente los datos del vehículo, los cuales no encuentran relación con el acto administrativo que se reclama; de ahí, que no se acredite el derecho subjetivo para solicitar la nulidad del acto que afecta al vehículo con número de placas ■■■■■, por lo que se actualiza la causal de improcedencia en comento, procediendo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, fracción I y último párrafo, en relación con el numeral 74, fracción V, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, **decretar el sobreseimiento del presente juicio.**

Cobra aplicación al presente criterio, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, consultable en la página 225 doscientos veinticinco, Tomo XXVII, Enero de 2008 dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, donde se establece que el interés jurídico debe acreditarse de forma fehaciente y no en base a presunciones, por lo que la afectación alegada debe lesionar de manera real y directa los bienes jurídicamente ampararlos al accionante, a saber:

*“INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.”*



A virtud de lo anterior, no ha lugar a entrar al estudio de los conceptos de impugnación expuestos por la parte actora, tomando en consideración que en nada variaría el sentido del presente fallo, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción I del artículo 29 de la Ley que rige la Materia, atento a lo justificado en la Tesis Jurisprudencial visible en la página 77 setenta y siete del Tomo 77 setenta y siete, Mayo de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza:

**“SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los conceptos de anulación tendientes a demostrar las causales de nulidad de que adolece la resolución impugnada, que constituye el problema de fondo, si se declara el sobreseimiento del juicio contencioso-administrativo.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.”**

Por todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, fracción I, 30, fracción I y último párrafo, 47, 72, 73 y 74, fracción V de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se resuelve a través de los siguientes:

## **R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO.-** Se decreta el sobreseimiento del presente juicio administrativo, al no acreditar el interés jurídico para promover, atento a los motivos y consideraciones legales que se desprenden del Considerado III de la presente resolución.

### **NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO.**

Así lo resolvió y firma el Presidente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Magistrado Laurentino López Villaseñor, actuando ante la Secretario Patricia Ontiveros Cortés, que autoriza y da fe. -----

**MAGISTRADO PRESIDENTE**

**LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR**

**SECRETARIO**

**PATRICIA ONTIVEROS CORTÉS**



La Segunda Sala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.-----